



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

DECLARA ILEGALIDAD Y ADECUA TRÁMITE-MANDAMIENTO DE PAGO  
CLASE DE PROCESO: MONITORIO. –  
(Adecuado a Proceso ejecutivo para la efectividad de la Garantía Real)  
RAD. 20001-4003007-2020-00033-00  
DEMANDANTE: LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ C.C. 1.082.245.305  
DEMANDADO: DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE C.C. 36.445.563

Valledupar, Cinco (5) de Abril de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Encontrándose el presente proceso para efectos de pronunciarnos de frente a la contestación que se hiciera frente al requerimiento de fecha 10 de marzo de 2020

Examinado el expediente se tiene que en auto adiado 10 de marzo de 2020 se ordenó requerir a la parte demandada

*“PRIMERO: Requerir a DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE, para que en el plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, pague a LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ, la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00) por concepto de obligación contraída en el contrato de hipoteca abierta en cuantía indeterminada.*

*SEGUNDO: Notifíquese este auto al deudor en la forma indicada en los artículos 291 a 293 del C.G.P., con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que no admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de la deuda.*

*TERCERO: MANTÉNGASE el expediente de la referencia en la secretaría de este despacho, pc el término de treinta (30) días, a fin de que la parte demandante impulse el proceso d conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 articulo 317 C. G.P.*

*CUARTO: Vencido el término de los treinta (30) días de que trata la norma anteriormente citado regrese el expediente al despacho para lo de su cargo.*

*QUINTO: Téngase al doctor PEDRO JOSE MARTINEZ CARRANZA identificado con C.O 1.065.570.737 y portador de la tarjeta profesional N° 286.592, como apoderado de la parte demandante, en la forma y según los efectos del poder conferido”*

Verificándose que la demandada se notificó personalmente conforme acta de notificación

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO  
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIA  
CALLE 14 CARRERA 14 ESQUINA – PISO 6 PALACIO DE JUSTICIA  
VALLEDUPAR – CESAR

ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL

Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles y de Familia. En Valledupar – Cesar a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022), realizo notificación personal por medio de Acta al (a) señor (a) **DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE** identificado con C.C. No. 36.445.563 expedida en Valledupar - Cesar en su condición de demandado (a). Notificación que recae sobre el auto de fecha diez (10) de marzo de dos mil veinte (2020), proferido por el **JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE VALLEDUPAR**, mediante el cual se resolvió requerir a **DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE** para que en el plazo de diez (10) días contados a partir de la notificación pague a **LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ** la obligación contraída, dentro del proceso **MONITORIO**. Radicado 20001-40-03-007-2020-00033-00. Se le hace entrega del traslado (12 folios escritos dobles) y copia del mencionado auto. En constancia se firma.

El notificado,

DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE

Quien Notifica,

ANA EDITH RAMIREZ ALANDETE

Ahora bien habiéndose notificado en fecha 10 de octubre de 2022 el término para contestar se venció el día 25 de octubre de 2022 y la parte demandada contestó y formuló excepciones de mérito y previas en fecha 28 de octubre de 2022.

Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar  
Carrera 14 Calle 14 Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia  
Teléfono: 57 - 5800688 | Mail: [cservcpvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cservcpvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co)

De: ANDRES OG <andresog@abocontasst.com>  
Enviado: viernes, 28 de octubre de 2022 16:05  
Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <cservcpvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Cc: pedrojose290885@hotmail.com <pedrojose290885@hotmail.com>; Juzgado 07 Ci Municipal - Cesar - Valledupar <j07cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>  
Asunto: CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y EXCEPCIONES PREVIAS

Por medio de la presente allego ante ustedes contestación de demanda, en virtud al proceso monetario adelantado por Lizeth Sepulveda el cual cursa en el Juzgado 4 de pequeñas causas y competencias múltiples de Valledupar e identificado con radicado 2020-033. Así mismo se deja constancia que se le corre traslado a la parte demandante tanto del escrito de contestación donde se proponen excepciones de mérito así como excepciones previas.

ANDRES ORREGO GALEANO  
ABOGADO LITIGANTE Y EN EJERCICIO  
CEL: 3117117973



CONTESTACIÓN  
Y ANE...YZ.pdf



Excepciones  
previas...triz.pdf

De acuerdo con ello se contestó la demanda vencido el término concedido para ello.

Dispone el artículo 421 del C.G. del P., ;



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

**“ARTÍCULO 421. TRÁMITE.** Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de diez (10) días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.

El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor, con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de la deuda. Si el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago.

Si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia a que se refiere este artículo y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 306. Esta misma sentencia se dictará en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este evento, por la parte objetada se procederá como dispone el inciso siguiente.

Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo 392 previo traslado al demandante por cinco (5) días para que pida pruebas adicionales.

Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor.

**PARÁGRAFO.** En este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas reconvenición, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos.”

De acuerdo con dicha norma ante la contestación extemporánea, devendría dictar sentencia, sin embargo estima el despacho que se torna preciso efectuar control de legalidad frente a la decisión de fecha 10 de marzo de 2020 como se pasa a explicar.

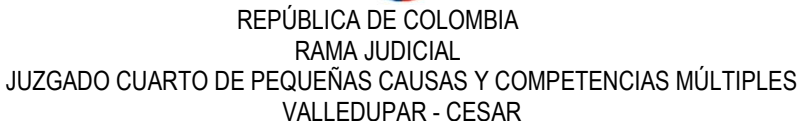
Observada la demanda que se presentó encauzada por el proceso monitorio, se tiene que se esbozaron los siguientes hechos:

“

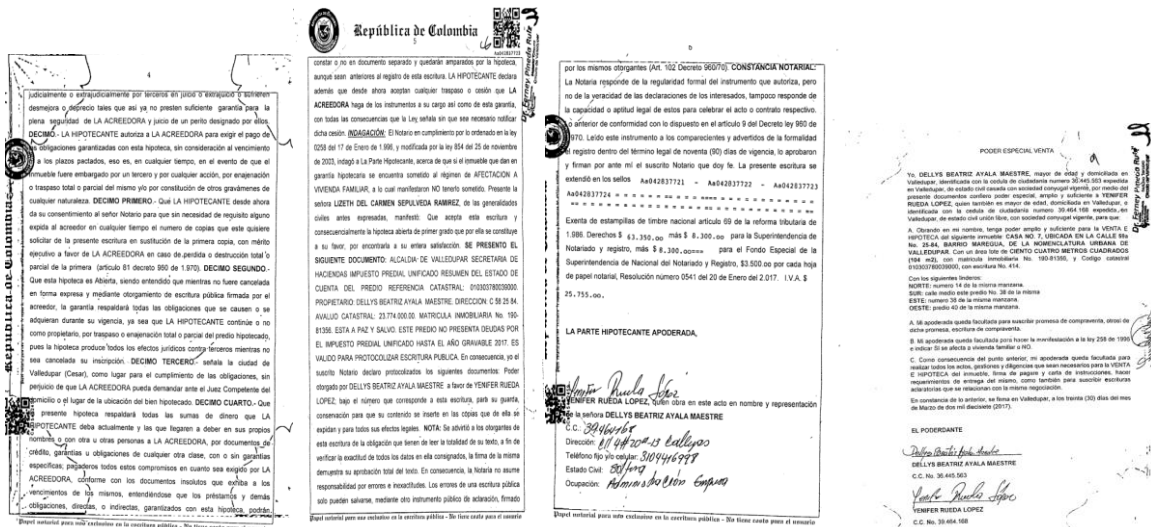
**HECHOS.**

1. Con el fin de garantizar a la señora **LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ**, el pago de las obligaciones a su cargo, la señora **DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE**, identificada con Cédula de ciudadanía Número 36.445.563, constituyó a favor de mi mandante, **HIPOTECA ABIERTA Y EN CUANTIA ILIMITADA O INDETERMINADA**, sobre un inmueble urbano, ubicado en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, consistente en una casa de habitación, y el lote de terreno sobre el que se halla edificada, en la Calle No. 58 No. 25 - 84 de la actual nomenclatura urbana, distinguida como la Casa No. 39 de la Manzana 10 de la **URBANIZACIÓN MAREIGUA COMPLEJO IV**, con un área de **CIENTO CUATRO METROS CUADRADOS (104.00 M2)**, y alinderada así: NORTE, Con la Casa No. 14 de la misma manzana; SUR, Con la Calle en medio; ESTE, Con la Casa No. 38 de la misma manzana; y OESTE, Con la Casa No. 40 de la misma manzana.
2. La hipoteca en mención se constituyó mediante la Escritura Pública No. 476 del 6 de Abril de 2017 de la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar, inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, bajo el actual y vigente Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **190-81356**. En el catastro vigente de la ciudad de Valledupar, se distingue con la Cédula Catastral No. **0103 000 003 780 039 000 000 000**.
3. Que según se plasmó en la cláusula segunda de la hipoteca en ya aludida, la señora **LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ**, desembolso a la hipotecante la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00)**, suma que declaro por medio de su apoderada para ese acto señora **YENIFER RUEDA LOPEZ**, identificada con Cédula de ciudadanía Número 39.464.168, haber recibido en calidad de préstamo de mutuo dicha suma, por lo cual constituyó la hipoteca.
4. No obstante el vencimiento, la obligación contenida en la hipoteca antes descrita, no ha sido descargada por la deudora, quien a su vez tampoco ha pagado los intereses de esta obligación, por lo que esta misma se acelera para su exigibilidad, tal como se plasmó en la cláusula novena del contrato de hipoteca.
5. La señora **LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ**, me ha conferido poder suficiente para instaurar esta acción.

Y como pretensiones



1. Condenar a la señora **DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE**, a pagar la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.00)**, a mi mandante, por concepto de la obligación contraída en el contrato de hipoteca ya nombrado.
2. Condenar a pagar la suma de los intereses pactados que hoy ascienden a la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (\$10.471.000.00)**, desde el día 7 de mayo de 2017 hasta el 21 de octubre de 2019, y hasta cuando se realice el pago; más las costas del proceso a que a que diere lugar esta demanda.
3. Estas declaraciones la hago bajo juramento estimatorio.
4. Condenar en costas.

[illegible]

Constatándose que se trata de una hipoteca constituida por la parte demandada a través de apoderada a favor de la parte demandante y en cuyo texto del instrumento público se establece la obligación claramente en ñla clausula segunda que garantiza el préstamo poR VALOR DE quince millones de pesos





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

18432MCMN0000032  
República de Colombia

**SEGUNDO:** Que por medio de este instrumento público, constituye **HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO** en favor de la señora **LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ**, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.082.245.305** expedida en Ariguani, de estado civil soltera, sin unión marital de hecho,, por la suma de **QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$15.000.000.00)**, que de él ha recibido en calidad de mutuo sobre el siguiente predio de su propiedad: Un lote de terreno urbano con una extensión superficial de **CIENTO CUATRO METROS CUADRADOS (104 M2)** y la casa en el construida, distinguido con el número **39** de la manzana **10** de la Urbanización **MAREIGUA COMPLETO IV**, ubicado en la **Calle 59A** número **25- 84** actual nomenclatura urbana de la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE.-** Con predio número 14 de la misma manzana; **SUR.-** Calle en medio; **ESTE.-** Con predio número 38 de la misma manzana y **OESTE.-** Con predio número 40 de la misma manzana. No obstante la cabida y linderos anotados la hipoteca se hace como cuerpo cierto. En

Y adicionalmente en la clausulas SEXTA, SEPTINMA, OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA CUARTA consagra l que la hipoteca esta constituida como garantía y la facultad de acudir al proceso ejecutivo por la obligación inmersa y garantizada en el instrumento público

LA HIPOTECANTE los gastos que demande este instrumento, su registro y posterior cancelación. **SEXTO:** LA HIPOTECANTE, cancelará a LA ACREEDORA los intereses de ley. **SEPTIMO:** Que esta hipoteca garantiza a LA ACREEDORA, todas las obligaciones que por cualquier causa, contraigan LA HIPOTECANTE a su favor, trátase de prestamos, pagares, letras de cambio comercial y demás documentos firmados por ellos a favor de LA ACREEDORA, las costas judiciales y cualesquiera otros gastos que LA ACREEDORA hiciere en la cobranza si a ello hubiere lugar de ellos. **OCTAVO.-** Que en la hipoteca se incluyen todas las mejoras, dependencias, anexidades presentes y futuras, las pensiones e indemnizaciones que conforme a la ley civil quedan incluidas en ella. **NOVENO.-** Que LA ACREEDORA podrá dar por vencidas en caso de incumplimiento unilateralmente aunque no lo estuvieren ya los plazos de cualquiera de las deudas contraídas a favor del acreedor, que se hagan constar en los diferentes documentos a todas ellas y exigir no solo cancelación inmediata sino además, demandar su pago judicialmente por cualquiera de las siguientes causales: a). Si el(los) hipotecante(s) incumpliere(n) las obligaciones aquí contraídas; b). Si, la hipotecante enajena total o parcialmente el inmueble determinado por su ubicación, cabida y linderos en el numeral segundo de esta escritura, o constituye gravamen hipotecario a favor de terceros sin previo consentimiento escrito de LA ACREEDORA, c) Si el pago de los intereses pactados, que se pagaran mensualmente se interrumpieren, incumplieren por una o más mensualidades, d). Si el predio que por esta escritura se da en hipoteca fuere perseguido

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

4

judicialmente o extrajudicialmente por terceros en juicio o extrajuicio o sufrieren desmejora o deprecio tales que así ya no presten suficiente garantía para la plena seguridad de LA ACREEDORA y juicio de un perito designado por ellos. **DECIMO.-** LA HIPOTECANTE autoriza a LA ACREEDORA para exigir el pago de las obligaciones garantizadas con esta hipoteca, sin consideración al vencimiento a los plazos pactados, eso es, en cualquier tiempo, en el evento de que el inmueble fuere embargado por un tercero y por cualquier acción, por enajenación o traspaso total o parcial del mismo y/o por constitución de otros gravámenes de cualquier naturaleza. **DECIMO PRIMERO.-** Que LA HIPOTECANTE desde ahora



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

domicilio o el lugar de la ubicación del bien hipotecado. **DECIMO CUARTO.-** Que la presente hipoteca respaldará todas las sumas de dinero que LA HIPOTECANTE deba actualmente y las que llegaren a deber en sus propios nombres o con otra u otras personas a LA ACREEDORA, por documentos de crédito, garantías u obligaciones de cualquier otra clase, con o sin garantías específicas; pagaderos todos estos compromisos en cuanto sea exigido por LA ACREEDORA, conforme con los documentos insolutos que exhiba a los vencimientos de los mismos, entendiéndose que los préstamos y demás obligaciones, directas, o indirectas, garantizados con esta hipoteca, podrán.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia

5



Aa042837723

constar o no en documento separado y quedarán amparados por la hipoteca, aunque sean anteriores al registro de esta escritura. LA HIPOTECANTE declara además que desde ahora aceptan cualquier traspaso o cesión que LA ACREEDORA haga de los instrumentos a su cargo así como de esta garantía, con todas las consecuencias que la Ley señala sin que sea necesario notificar dicha cesión. **INDAGACIÓN:** El Notario en cumplimiento por lo ordenado en la ley

Dr. Fernan...

De acuerdo con lo plasmado en el instrumento de frente a los hechos y pretensiones de la demanda se logra establecer que se pretende el pago de la obligación constituida en el instrumento publico, por lo que no devenía presentar la demanda por los cauces del proceso monitorio sino a través de un proceso ejecutivo con garantía real. Ello por cuanto el objeto del proceso monitorio en si es la constitución del título ejecutivo de que se carece y en este caso ya este título esta constituido.

Véase que en torno a la naturaleza del proceso monitorio en sentencia de exequibilidad proferida por la Corte Constitucional se precisó :

*“ Dentro del capítulo sobre los procesos declarativos especiales, el Código General del Proceso incluyó al proceso monitorio como innovación dentro del régimen procesal civil colombiano. Conforme al artículo 419 de dicho Código, este proceso permite la exigibilidad judicial de obligaciones en dinero, que tengan naturaleza contractual, que sean exigibles y que no excedan la mínima cuantía.*

*El artículo 420 ejusdem determina, a su vez, los requisitos de la demanda del proceso monitorio. Dentro de ellas se destacan que el demandante debe definir la pretensión de pago, expresada con precisión y claridad, así como los hechos que sirven de fundamento a la misma, “debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.” Asimismo, debe manifestarse en la demanda, “de forma clara y precisa (...) que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.” En consonancia con estos requisitos, la norma determina que el demandante deberá aportar con el libelo “los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. || Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales.”*

*En cuanto al trámite del proceso monitorio, el artículo 421 del Código General del Proceso prevé un procedimiento simple y dirigido a la exigibilidad de las obligaciones reclamadas dentro de un marco de celeridad. Así, admitida la demanda el juez ordenará requerir al demandado por el plazo de 10 días para que pague o conteste la demanda a partir de las “razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada.” La admisión de la demanda se expresa a través de un auto de requerimiento de pago, el cual se notifica personalmente al deudor.*

*Si el deudor no paga dentro del plazo previsto, no justifica su renuencia o simplemente no comparece al proceso, se dictará sentencia contentiva del monto reclamado y sus intereses, y se procederá a la ejecución de la misma, según las reglas del artículo 306 CGP. Esta misma determinación se adoptará “en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada.”*

*En caso que el deudor satisfaga la obligación en la forma señalada en el auto de requerimiento de pago, se declarará terminado el proceso. Igualmente, en caso que el demandado conteste la demanda con la “explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá adoptar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo 392, previo traslado al demandante por cinco (5) días para que pida pruebas adicionales.”*



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

Conforme a la normatividad en comento, si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá además una multa equivalente al 10% del valor de la deuda. Lo mismo sucederá a favor del deudor, en caso que el demandado resulte absuelto. Finalmente, el parágrafo del artículo analizado dispone que “en este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas, reconvencción, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos.”

20. Como se observa, el proceso monitorio es un trámite judicial simplificado, que busca facilitar la exigibilidad judicial de obligaciones en dinero, las cuales no constan en un título ejecutivo, pero que son exigibles, tienen un fundamento contractual y no superan la mínima cuantía. Con una estructura dirigida a la ejecución pronta de las obligaciones, el proceso monitorio tiene dos momentos principales, la admisión de la demanda a través del auto de requerimiento de pago y la sentencia, a través de la cual se ordena ejecutar en todo o en parte la obligación reclamada.

El proceso monitorio, en ese orden de ideas, prescinde de diferentes recursos y oportunidades procesales diferentes a la notificación personal y al ejercicio del derecho de defensa por parte del demandado, precisamente con el ánimo de preservar la agilidad en el trámite judicial. La Corte, en ese sentido, concuerda con lo expresado por algunos de los intervinientes, con referencia a que el propósito general del proceso monitorio es dotar a la jurisdicción civil de un trámite expedito y simple, destinado a la exigibilidad judicial de obligaciones suscritas entre pequeños comerciantes y respecto de sumas de menor y mediano valor.

Se trata, en últimas, de una innovación en el proceso civil colombiano, destinado a solventar las necesidades de segmentos importantes de la población usuaria del sistema de justicia, quienes tienen obligaciones de menor monto y que no constan en un documento que cumpla con las condiciones propias de los títulos ejecutivos. Estas necesidades de justicia se satisfacen a través de un procedimiento simplificado, que parte de la orden judicial de pago de la obligación y que compele a su cumplimiento por parte del deudor, sin que pueda esgrimirse en su defensa razones distintas a aquellas que demuestren la inexistencia de la obligación o el pago de la suma requerida.

La limitada participación jurisdiccional y la celeridad del trámite dirigida a la exigibilidad pronta del derecho reclamado ante los jueces son, por ende, los elementos esenciales del proceso monitorio. Así lo resalta la doctrina extranjera, que al hacer un balance de las diferentes definiciones de este procedimiento en el derecho comparado, lo identifica como parte de “los procesos simplificados que tienen por (1) objetivo el otorgamiento de un título ejecutivo judicial (sentencia monitoria) en forma rápida, económica y con escasa participación del órgano jurisdiccional; (2) mediante una previa intimación de pago judicial (aviso de pago y/o requerimiento de pago) (3); contra la cual el requerido no ofrece oposición oportuna y suficiente (técnica del secundum eventum contradictionis); (4) solo en caso de oposición pesa sobre el requirente instar el proceso contradictorio de conocimiento (estructura de la inversión del contencioso)”<sup>1271</sup>

21. Estos elementos esenciales del proceso monitorio son identificados de una manera más precisa por otros autores. Al respecto, Correa Delcasso,<sup>1281</sup> al analizar el proceso monitorio instaurado en la reforma a la Ley española de Enjuiciamiento Civil, que guarda evidente similitudes con el colombiano,<sup>1291</sup> advierte que (i) tiene naturaleza especial, pues no cumple con las condiciones propias de un proceso declarativo común, en tanto contiene restricciones y modificaciones procesales significativas; (ii) es un proceso plenario rápido, en tanto invierte la iniciativa del contradictorio. “Así, cuando el deudor no formula, en el plazo legalmente establecido, una oposición contra el mandato de pago dictado inaudita altera parte en su contra, el proceso monitorio finaliza sin más y produce plenos efectos de cosa juzgada, exactamente equiparables a los de cualquier otra resolución jurisdiccional que resuelve definitivamente el fondo de un litigio”; y (iii) la integración material del contradictorio es eventual, pues solo se activa cuando el deudor se opone al pago total o parcial de la obligación. Al respecto, expresa este autor que “se deja en manos de quien, por definición, tiene interés en combatir el fundamento de la pretensión del acreedor (esto es, en manos del deudor), el juicio sobre la oportunidad de abrir el contradictorio, de modo que, si no opone nada frente a la misma, se sobreentiende que “quien calla otorga” y, consecuentemente, que puede obviarse, sin más, el trámite de contestación y de prueba.”

Además de la intención de agilizar el trámite de los procedimientos judiciales, el Código General del Proceso instauró mecanismos que respondan a las condiciones propias de los usuarios del sistema de justicia, quienes generalmente tienen dificultades de índole probatoria para la formalización de sus operaciones comerciales, las cuales se traducen en barreras para su exigibilidad judicial ante el incumplimiento. Esto debido a que, bajo el régimen procesal anterior, en aquellos casos la conformación de títulos ejecutivos quedaba restringida o bien a su potencial configuración a través del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o al trámite de procesos declarativos ordinarios, por lo general extensos y complejos.

Este es el caso particular del proceso monitorio. Es un trámite judicial declarativo especial, tendiente a lograr la exigibilidad judicial de obligaciones líquidas que no constan en un título ejecutivo. Estos derechos de crédito corresponden generalmente a transacciones de montos bajos o medios, realizadas en condiciones de informalidad económica. A este respecto, la sentencia C-726/14, luego de identificar dicha naturaleza del proceso monitorio desde el trámite legislativo, concluye que “la introducción del proceso monitorio en el Código General del Proceso constituye una medida de acceso a la justicia para acreedores de obligaciones dinerarias de pequeña o mediana cuantía que no pueden o no acostumbran documentar sus créditos en títulos ejecutivos y que por lo complicado que resulta acudir a un proceso judicial complejo y demorado, desisten de su cobro. El nuevo proceso permite, con la declaración del demandante, en forma rápida y fácil, obtener un requerimiento judicial de pago y ante el silencio del demandado, acceder a la ejecución.”

En esta misma dirección se expresó el Congreso dentro del trámite legislativo de la Código General del Proceso. Así, en el informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley correspondiente, citado por la sentencia C-726/14, se hace énfasis en que el proceso monitorio es instituido con el fin de facilitar la constitución o el perfeccionamiento del título





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

*ejecutivo, basado en la ausencia de oposición del deudor y respecto de obligaciones en dinero, de naturaleza contractual, determinadas, exigibles y de mínima cuantía. Por ende, el proceso monitorio tiene por objeto hacer la justicia más asequible a los ciudadanos, a través de un trámite judicial que permite ejecutar obligaciones que no constan en un título ejecutivo, sin necesidad de agotar un proceso ordinario de conocimiento. Con base en ello, la decisión en comento señala que “el proceso monitorio persigue una finalidad esencialmente social, orientada a garantizar que las transacciones dinerarias informalmente celebradas por los ciudadanos, cuenten con una resolución pronta y sin dilaciones injustificadas. De esta manera, el proceso monitorio se constituye en un procedimiento de acceso a la justicia para acreedores de obligaciones de mínima cuantía, que en la costumbre informal de sus transacciones dinerarias no documentan sus créditos en títulos ejecutivos, sin que por ello se les deba someter a un proceso judicial extenso y formal que desvanezca la eficiencia de la administración de justicia.”*

..

*23. En suma, la Corte observa que la jurisprudencia constitucional ha asumido el proceso monitorio como un trámite judicial declarativo simplificado, que pretende otorgar una herramienta ágil para la exigibilidad judicial de obligaciones en dinero limitadas en su cuantía, y que no consten en un título ejecutivo. Procedimientos de esta naturaleza, de manera general, desarrollan los objetivos de un sistema de justicia ágil, oportuno y que garantiza la tutela judicial efectiva, específicamente enfocada en entornos económicos parcialmente formalizados, que requieren instrumentos céleres para la ejecución de deudas líquidas no soportadas en títulos ejecutivos.”<sup>1</sup>*

De lo anterior se extrae que el proceso monitorio es un trámite a través del cual puede hacerse exigible el pago pretendido por una obligación monetaria; o bien como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias (como es el caso de la Sentencia C-159-16 de 17 de marzo de 2016, Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.), es un trámite declarativo especial, cuya finalidad es permitir la exigibilidad judicial de obligaciones monetarias de mínima cuantía que no están expresadas en un título ejecutivo, dicha obligación debe ser clara y con un valor determinado, exigible y de mínima cuantía.

Corolario de lo anterior es que existiendo un título que presta mérito ejecutivo, como en este caso lo constituiría la E.P. de Hipoteca, la demanda no debía formularse por el procedimiento del proceso monitorio, sino a través de un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real porque la demandante cuenta con un título ejecutivo que contiene una obligación clara, expresa y exigible; lo que torna inócua el proceso ejecutivo el cual, como se señaló en líneas anteriores, tiene como propósito constituir un título ejecutivo del que se carece.

Por ello se estima que el auto adiado 10 de marzo de 2020 que ordenó el requerimiento de que trata el artículo 420 no debió proferirse toda vez que no se daban los presupuestos para dar el trámite del Proceso Monitorio elegido por el demandante, porque se reitera se contaba con título ejecutivo, al tratarse de una hipoteca directa en la que además de constituirse la hipoteca se plasma el contenido de la obligación.

Bajo ese derrotero resulta necesario decretar la ilegalidad de dicha providencia en ejercicio del control de legalidad que puede efectuar el juez de acuerdo a lo previsto en el artículo 132 del C.G. del P. y 44, numeral 5° del mismo estatuto procesal, norma que autoriza adoptar las medidas necesarias para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos.

A su vez es de precisar sobre la figura de la ilegalidad, que, nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada ha expresado que los autos ilegales no atan al juez, es así como en providencia CSJ SL, 24 abr. 2013, rad. 54564, puntualizó:

*“Bastante se ha dicho que el juez no puede de oficio ni a petición de parte revocar, modificar o alterar un auto ejecutoriado, pero también, que el error cometido en una providencia no lo obliga a persistir en él e incurrir en otros, menos, cuando su causa, como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencial que indica que ‘los autos ilegales no atan al juez ni a las partes’ y, en consecuencia, apartarse la Corte de los efectos de la mentada decisión”*

En ese orden se dejará sin efectos el auto en mención de fecha 10 de marzo de 2022 y se adecuará el trámite al correspondiente al proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, conforme lo autoriza el artículo 90 del C.G. del P., realizándose el estudio correspondiente a la calificación de la demanda.

Ahora bien, revisada la presente demanda bajo los lineamientos del procedimiento o trámite del proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real -hipoteca, se tiene que la parte demandada constituyó hipoteca abierta a favor de la parte demandante para garantizar la obligación inmersa en el mismo instrumentos públicos como se indicó en líneas arriba.

Tomando como base los anteriores antecedentes corresponde a este despacho entrar a decidir respecto al librar el mandamiento de pago o no, del presente trámite, para ello se precisa que, en lo que respecta a los requisitos formales de la demanda se puede constatar que la misma cumple con los requisitos generales a los que hace referencia el artículo 82 del Código General del Proceso, así como el requisito especial que señala el artículo 430 de la misma obra y 468, en igual sentido se pudo verificar que la Escritura Pública, contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Véase que De la Escritura pública No. 2017 del 6 de abril de 2017 E.P. de Hipoteca otorgada en la Notaria Tercera del Círculo de Valledupar, se desprende que se constituyó por la parte demandada a favor de la parte demandante por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) que la parte demandada declara en el mismo instrumentos haber recibido en virtud de un mutuo.

---

<sup>1</sup> T-159 de 2016.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL  
JUZGADO CUARTO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES  
VALLEDUPAR - CESAR

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en este caso se trata de una obligación puro y simple, pues no se encuentra sometida a plazo, condición o modo, de suerte entonces que los intereses moratorios se causan a partir de la notificación de la notificación del mandamiento de pago al demandado tal y como lo dispone el 3° del artículo 1608 del C.C. el cual textualmente dice: “[e]l deudor está en mora: (...) 3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”, además, el inciso segundo del artículo 94 del C.G.P. nos enseña que “[l]a notificación (...) del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación (...) [l]os efectos de la mora sólo se producirán a partir de la notificación”, en este mismo sentido se refiere el artículo 423 de la norma en mención.

Además, al ser éste un negocio civil la tasa porcentual a la que debe utilizarse es la legal señala en el numeral 1° del artículo 1617 del Código Civil, esto es, el 6% anual.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la ilegalidad del auto adiado 10 de marzo de 2020 por medio del cual se ordenó requerimiento al deudor conforme el artículo 421 del C.G. del P., lo anterior por la razón expuesta en la parte motiva de éste proveído.

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del C.G. del P y por la razón expuesta en la parte motiva adecuar el trámite de la presente demanda al proceso Ejecutivo para la Efectividad de la Garantía Real.

TERCERO: PRIMERO. - Librese mandamiento de pago en favor de LIZETH DEL CARMEN SEPULVEDA RAMIREZ, mayor y vecina de la ciudad de Valledupar, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.245.305 y en contra de DELLYS BEATRIZ AYALA MAESTRE, identificada con CC No. 36.445.563 por los siguientes valores y conceptos:

a) Por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000) Por concepto de capital contenido en el título.

b)-Por los intereses moratorios sobre la suma anterior liquidados a la tasa del 6% anual desde la notificación del mandamiento de pago hasta el pago total de la obligación.

Sobre la condena en costas el despacho se pronunciará oportunamente

CUARTO: Decrétese el embargo y posterior secuestro del bien inmueble hipotecado, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 190-81356, de la oficina de Registros de Instrumentos Públicos de la ciudad de Valledupar.

Oficiase al Registrador de Instrumentos Públicos de Valledupar para los efectos previstos en el numeral 1° del artículo 593 y 468 del C.G. del P.

QUINTO. – Ordenar a la parte demandada que, en el término de 5 días contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a la cancelación de las sumas de dinero que aquí se demanda.

SEXTO: CUARTO. - Requerir a la parte demandante a fin que cumpla con las diligencias tendientes a lograr la notificación personal del demandado en la forma prevista por los artículos 290 a 293 del C.G.P., en concordancia con la ley 2213 de 2022, que estableció como legislación permanente el Decreto 806 de 2020, y en el mismo acto córrasele traslado de la demanda y sus anexos por el término de diez (10) días hábiles para que conteste y aporte las pruebas que pretenda hacer valer.

SÉPTIMO. - Reconózcasele personería jurídica al abogado PEDRO JOSE MARTINEZ CARRANZA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.570.737 expedida en Valledupar, abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 286.592, con las facultades y en los mismos términos conferidos en poder.

OCTAVO. - Advertir a la parte demandante que, en cualquier momento el despacho podrá requerirla para que aporte el original del título de recaudo, para los fines previstos en los artículos 167, 174 y 245 del C.G.P. o para lo que se considere pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA PATRICIA DIAZ MADERA  
Juez